

Fecha: 22-02-2025
Medio: La Tercera
Supl.: La Tercera
Tipo: Noticia general
Título: ¿Hay margen para el recorte de US\$ 6.000 millones en el gasto público planteado por Matthei?

Pág.: 9
Cm2: 837,8

Tiraje: 78.224
Lectoría: 253.149
Favorabilidad: ☐ No Definida

Frente a frente



Jorge Hermann
Economista

El legado fiscal de Mario Marcel

El próximo Presidente de Chile, independientemente de su color político, deberá enfrentar el reto de llevar a cabo un ajuste significativo en el gasto fiscal. Este desafío se debe a la gestión cuestionable de Mario Marcel y Javier Martínez durante el actual gobierno. El centro del problema es la persistente sobreestimación de los ingresos tributarios desde 2023, acompañado por la ausencia de un ajuste sustancial en el gasto público. Esta situación pone en riesgo el cumplimiento de la meta de déficit estructural y podría elevar la deuda bruta hacia un 45% del PIB.

Con el fin de cuadrar la caja fiscal, el Ministerio de Hacienda ha implementado varias estrategias, más allá de la habitual emisión de deuda. Estas incluyen la venta de activos de Corfo vinculados al litio por US\$ 1.500 millones en 2023 y la utilización de US\$ 1.800 millones de fondos soberanos en 2024. Además, un par de meses después de la aprobación del presupuesto de 2025, Hacienda se vio obligada a reducir la sobreestimación de ingresos fiscales de un 24,3% a un 23,1% del PIB. A pesar de este ajuste, mi proyección es que los ingresos podrían situarse alrededor del 22,5% del PIB y que el déficit fiscal podría alcanzar el 2,3% del PIB, superando el 1,7% previsto por Hacienda.

Para cumplir con los objetivos de déficit estructural, es esencial reducir el gasto público. La regla actual de déficit estructural está en entredicho, ya que la sobreestimación de los ingresos está debilitando la credibilidad institucional de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Para alcanzar la meta de un déficit estructural del -1,1% en 2025, es necesario un ajuste del gasto de US\$ 1.500 millones. Sin embargo, dada la persistente sobreestimación de ingresos, este ajuste debería ser aún mayor, de cerca de US\$ 4.000 millones.

El ajuste del gasto puede comenzar con un análisis detallado de los resultados del monitoreo de programas sociales y no sociales de 2023 realizado por la Dipres, enfocado en tres dimensiones: focalización, eficiencia y eficacia. El análisis reveló que 202 programas, que suman un gasto de US\$ 21.609 millones, no cumplen con dos o más de estas dimensiones. Por lo tanto, es fundamental realizar una revisión para considerar la eliminación de aquellos programas que no pertenecen a áreas claves como salud, educación y seguridad. Esta medida optimizaría el uso de los recursos públicos y ayudaría a reducir el gasto para el actual y el próximo gobierno.

Aunque las circunstancias recientes son desafiantes, aún hay tiempo para que el gobierno retome una senda de disciplina fiscal. El ministro Marcel ha manifestado su intención de realizar los ajustes necesarios en la presentación del Informe de Finanzas Públicas, prevista para abril próximo. Lograr este ajuste será esencial no solo para su legado fiscal, sino también para garantizar que la meta establecida sea efectivamente alcanzada.

En definitiva, el país se encuentra en un momento crucial en que es indispensable la implementación de un profundo ajuste del gasto fiscal, junto con una gestión responsable. Esto no solo restaurará la estabilidad y confianza en las finanzas públicas, sino que también fortalecerá la credibilidad institucional y la posición económica de Chile en el ámbito internacional. Para el próximo gobierno, comenzar su mandato con una base financiera sólida y confiable será fundamental para abrir el camino hacia un futuro más próspero.



Gonzalo Martner
Académico, Facultad de Administración y Economía Usach

¿Nuevos recortes de gasto público?

Los administradores de organizaciones suelen pedir más personal y más presupuesto para cumplir sus funciones. A los directores de empresas les toca evaluarlas de acuerdo a un fin: maximizar la rentabilidad del capital invertido por los dueños.

¿Quién lo hace en el sector público, y de acuerdo a qué fines, a nombre de la ciudadanía? Dado que intervienen diversos actores y los fines son múltiples, de esa complejidad nace la necesidad de periódicas revisiones que ajusten fines y medios, lo que es especialmente el rol de los parlamentos. El momento clave es la aprobación anual del presupuesto. Luego pueden sobrevenir hechos que aconsejen alzas o bajas del gasto o de los ingresos.

En noviembre pasado se aprobó un presupuesto para 2025 con el apoyo de la oposición, con recortes durante la discusión. Pero se está en el segundo mes del año y el período electoral gatilló una escalada desde la oposición que pide bajas de gasto de hasta -3% del PIB, lo que es evidentemente recesivo. ¿Será la influencia de la moto-sierra de Milei, que no es precisamente un ejemplo de racionalidad ni de probidad, o bien del asalto al gobierno por parte de Musk en Estados Unidos?

Hay una inquietud en Chile, pues se arrastra un enorme salto en la deuda pública neta en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la que pasó de 4,4% del PIB en 2017 a 20,2% en 2021. Alcanzó luego un 26,9% hacia 2024, por un déficit fiscal de -2,9% del PIB, dada una menor recaudación a la prevista. El déficit estructural fue de un -3,2% del PIB, lo que requiere una consolidación fiscal para evitar incrementos de deuda en 2025 y años siguientes.

La menor recaudación tiene diversas explicaciones coyunturales, pero los ingresos estructurales por los cambios tributarios desde 2020 han sido inferiores a las estimaciones. Estas preveían un incremento de 2,5% del PIB hacia 2024, pero ha sido de solo 1,2%. Las mayorías conservadoras en el Parlamento han hecho su trabajo de oposición a los impuestos a los altos ingresos y a la renta minera y han logrado limitar su alcance. En 2019, los ingresos públicos sumaron un 21,8% del PIB; en 2022, un 26,0%, y en 2024, solo un 21,9%.

Recordemos que la deuda bruta dejada por la dictadura fue de 43,8% del PIB en 1989 y que la deuda pública en la OCDE es muy superior en promedio a la chilena. El nivel de deuda que no provoca crisis es el que no implica un pago sostenido de intereses superior al crecimiento del PIB. Su monto en Chile representó en 2024 el 1,2% de ese PIB. Como el crecimiento será al menos de un 2% anual en los próximos años, la situación no es para nada la de una crisis de deuda.

No obstante, si los conservadores gobiernan otra vez, pondrán el acento en bajar los impuestos y los gastos públicos. Más allá de ahorros en gastos inútiles, pero poco significativos, esto implicaría restringir gastos en salud, educación e infraestructura, lo que afectaría el crecimiento y el bienestar; o bien aumentar la deuda y avanzar a una fragilidad sistémica. Por su parte, si las fuerzas que hoy gobiernan retienen el Ejecutivo, deberán lograr mayorías parlamentarias para que los nuevos avances sociales que propondrán se financien con incrementos tributarios progresivos, y así se reparta mejor la carga del gasto público y no aumenten los pagos de intereses sobre el PIB. Recurrir al principio de precaución, junto al de justicia, será más que recomendable.

¿Hay margen para el recorte de US\$ 6.000 millones en el gasto público planteado por Matthei?

En un video difundido por redes sociales, la candidata presidencial dijo estar "preocupada" por el "malgasto de dinero fiscal", y añadió que "este gobierno, este año 2025, tiene que cortar al menos 3.000 millones de dólares. Y después nosotros vamos a cortar 6.000 millones de dólares adicionales". El Ejecutivo respondió que no basta con recortar, porque es necesario crecer, pero los especialistas difieren en cuánto y cómo hacerlo.



ILUSTRACIÓN: RAFAEL EDWARDS